



Lorena Sabogal <lsabogal@inverfuturoltda.com.co>

**DERECHO DE PETICIÓN SOLICITANDO ARCHIVO DE DILIGENCIA EXP:
110016000023202307227, Delito. LESIONES PERSONALES CULPOSAS Indiciada
LUISA FERNANDA PRIETO C.C: 52082342 Placa: JWV582**

Eduardo Chavez <echavez@inverfuturoltda.com.co>

10 de abril de 2024, 11:30 p.m.

Para: liliana.farfan@fiscalia.gov.co

CCO: lsabogal@inverfuturoltda.com.co

Señores**Fiscalía 238 LOCAL****CASA DE JUSTICIA -USAQUÉN****BOGOTÁ – CUNDINAMARCA****Referencia. EXP: 110016000023202307227****Asunto. DERECHO DE PETICIÓN SOLICITANDO ARCHIVO DE DILIGENCIA****Delito. LESIONES PERSONALES CULPOSAS****Indiciado. LUISA FERNANDA PRIETO C.C: 52082342****Victima. LUIS EDUARDO ROJAS SALGADO****C.C: 1003157726**

NOMBRE ABOGADO EDGAR EDUARDO CHAVEZ BENITEZ identificado con cédula de ciudadanía número **80093466** de **Bogotá** y tarjeta profesional número **179034** del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de defensor de **LUISA FERNANDA PRIETO C.C: 52082342**, indiciada en la presente indagación de la manera más comedida y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, 111 y siguientes del Código Penal, solicito se proceda al archivo del proceso y/o diligencia de acuerdo con los siguientes:

HECHOS.

1. El día 15-12-2023 Ocurrió accidente de tránsito en el que se vieron involucrados: **LUISA FERNANDA PRIETO C.C: 52082342** con el vehículo de placa **JWV 582** Y **LUIS EDUARDO ROJAS SALGADO C.C: 1003157726** en calidad de conductor de la motocicleta de placa **TNE 54G**
2. Al momento del accidente se levanta IPAT en el cual se evidencia codificación 104 adelantar invadiendo carril del sentido contrario codificación para el señor **LUIS EDUARDO ROJAS SALGADO** en calidad de conductor de la motocicleta de placa **TNE 54G**
3. Por ende, según codificación y los hechos fácticos desarrollados a mi apoderada no se le atribuye ninguna responsabilidad en el hecho generador del daño.

SOLICITUD.

Por los hechos anteriormente expuestos me dispongo a realizar la siguiente solicitud.

PRINCIPAL

1. Proceda esta fiscalía con el archivo de la investigación en cabeza de mi poderdante **LUISA FERNANDA PRIETO** dada la evidente falta de responsabilidad que le asiste a la misma en el accidente de tránsito.

Lo anterior amparado en el artículo 79 que reza:

ARTÍCULO 79. ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS. Cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación. Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal.

A su vez la sentencia C-1154 de 2005 amplía el artículo anterior, indicando que procede el archivo por parte de fiscalía cuando no se estructuran los presupuestos del tipo objetivo. Esta posibilidad es otorgada a la fiscalía para ordenar el archivo del expediente del que conozca en una indagación preliminar así:

(...) “Para poder ejercer la acción penal deben darse unos presupuestos que indiquen que una conducta sí puede caracterizarse como un delito. Por lo tanto, cuando el fiscal ordena el archivo de las diligencias en los supuestos del artículo 79, no se está ante una decisión de política criminal que, de acuerdo a unas causales claras y precisas definidas en la ley, permita dejar de ejercer la acción penal, sino que se está en un momento jurídico previo: la constatación de la ausencia de los presupuestos mínimos para ejercer la acción penal. El archivo de las diligencias corresponde al momento de la averiguación preliminar sobre los hechos y supone la previa verificación objetiva de la inexistencia típica de una conducta, es decir la falta de caracterización de una conducta como delito”.

(...) “La orden de archivo de las diligencias procede cuando se constata que no existen “motivos y circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito”

Conforme al aparte anteriormente citado se tiene que el archivo de las diligencias sólo es admisible cuando no se encuentran los presupuestos del tipo objetivo, esto es que el hecho investigado no reúna los elementos previstos en la norma penal y por tanto no puede ser caracterizado como delito.

En este orden de ideas es pertinente citar la ***infracción a deber objetivo de cuidado*** como elemento estructurador de la responsabilidad de carácter objetivo, definido como “*el deber de diligencia exigible al ciudadano en el cumplimiento de las obligaciones a que está sometido.*” Elemento que para el caso en concreto está ausente al realizar la víctima una acción en contravía a lo pactado en el ordenamiento jurídico respecto a las normas de tránsito, actuar indebido que quedó respaldado por el IPAT redactado por el policía de tránsito en donde se codificó a la víctima con la causal 104 adelantar invadiendo carril del sentido contrario.

La Corte Suprema de Justicia en Sala Penal en sentencia del 7 noviembre de 2018 SP4815 a especificado y clarificado la forma en la que deben ser evaluados los delitos culposos derivados de accidentes de tránsito de cara al deber objetivo de cuidado, al respecto refirió:

“Tratándose del tráfico terrestre, basta con asumir las siguientes pautas como directrices para establecer los deberes referidos:

I. El autor debe realizar la conducta como lo haría una persona razonable y prudente puesta en el lugar del agente, de manera que si no obra con arreglo a esas exigencias infringirá el deber objetivo de cuidado. Con este elemento se aspira a que con la observancia de las exigencias de cuidado disminuya al máximo los riesgos para los bienes jurídicos con el ejercicio de las actividades peligrosas, que es conocido como el riesgo permitido.

II. Acatar las normas de orden legal o reglamentario atinentes al tráfico terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, y a los reglamentos del trabajo, dirigidas a disciplinar la buena marcha de las fuentes de riesgos.

III. Dar cumplimiento al principio de confianza, que surge como consecuencia de la anterior normativa, consistente en que quien se comporta en el tráfico de acuerdo con las normas puede y debe confiar en que todos los participantes en el mismo tráfico también lo hagan, a no ser que de manera fundada se pueda suponer lo contrario.

IV. Observar el criterio del hombre medio, en razón del cual el funcionario judicial puede valorar la conducta comparándola con la que hubiese observado un hombre prudente y diligente situado en la posición del autor. Si el proceder del sujeto agente permanece dentro de

esos parámetros no habrá violación al deber de cuidado, pero si los rebasa procederá la imprudencia, siempre que converjan los demás presupuestos típicos.”

Conforme a los parámetros enunciados por la Corte Suprema de Justicia se tiene que la indiciada actúa conforme a las normas establecidas por el ordenamiento

En el caso analizado quedó dilucidado que el tercero motociclista faltando al deber objetivo de cuidado adelanta invadiendo carril de sentido contrario al parecer a exceso de velocidad dadas las huellas de arrastre metálicas plasmadas en el bosquejo topográfico del IPAT, por lo que quedó claro que el hecho resultante no fue causado por una infracción al deber objetivo de la conductora del automóvil, quien acató la disposición normativa que persigue, precisamente, evitar el resultado producido.

En conclusión, la consecuencia desencadenada es ajena a la intervención de mi poderdante, el siniestro se produjo por la actividad desplegada por quien manejaba la moto tal y como quedó demostrado en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito. Por lo tanto la causa eficiente del accidente obedece a un obrar imprudente por parte de la víctima, concluyendo entonces que mi poderdante no creo ni elevo riesgo alguno, existiendo una ausencia de conducta punible que pretende endilgar por esta fiscalía.

SUBSIDIARIA

1. En caso de no acceder al archivo solicitado. Remitir una respuesta de fondo donde se explique por qué no procede el cierre del proceso a pesar de no estructurarse delito alguno.
2. En caso de no acceder al archivo solicitado. Igualmente solicitó citar audiencia de conciliación entre las partes con el fin de dar trámite al proceso.

FUNDAMENTO DE DERECHO.

Presentación de peticiones ante autoridades como derecho constitucional:

La norma superior en su artículo 23, consagra que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta y completa resolución, en este sentido las sentencias de la Honorable Corte Constitucional han indicado que el derecho de petición tiene rango fundamental porque en diversas oportunidades sirve de instrumento para hacer efectivos otros derechos de rango fundamental e incluso brindar espacios de participación ciudadana *“al permitirles a los particulares acercarse a la administración para reclamar de las autoridades la respuesta a sus inquietudes y cuestionamientos”*. Se ha establecido que la respuesta al derecho de petición debe cumplir con los siguientes requisitos:

“i) [Deben contener una respuesta de fondo, pues aquellas respuestas que están dirigidas a evadir la información o a aplazar la toma de decisión, constituyen una clara afectación de este derecho fundamental, ii) deben ser oportunas, iii) deben ser claras, suficientes y congruentes con lo pedido”.

“La Corte sintetizó las reglas que previamente habían sido desarrolladas por la jurisprudencia en materia de protección del derecho fundamental de petición. Sobre el particular dijo: “a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas (subrayado propio) cuando la ley así lo determine. (Sentencia C-818 de 2011, MP: JORGE IGNACIO PRETEL CHALJUB)

De lo anterior se tiene que el derecho de petición constituye una garantía fundamental de aplicación inmediata cuyo núcleo esencial reside en la pronta y oportuna resolución de la petición, ya que de nada serviría la posibilidad de dirigirse a una entidad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. Es por esto, que para la Honorable Corte Constitucional, la respuesta de la solicitud tiene que ser pronta y adicional a ello, se tiene que resolver de fondo lo solicitado por el peticionario, es decir, abarcar en su totalidad la inquietud o solicitud que ha sido puesta bajo el conocimiento de la autoridad competente por el peticionario, ya que de no ser así, se desdibujan su naturaleza y constituye una burla a la efectividad de los derechos que por medio del derecho de petición constituye la manera de materializarlos.

ANEXOS

- Poder principal y de suplencia
- Fotocopia cedula y tp del suscrito

Agradezco su amable atención cordialmente

Edgar Eduardo Chávez Benítez

cc 80.093.466 de Bogotá

TP 179034 CSJ

CEL 3002510714

DIRECCIÓN: [CALLE 93 B NO 18-45 OFICINA 204](#)

INVERFUTURO LTDA

Bogotá D.C

2 archivos adjuntos

 **PODER PRINCIPAL Y DE SUPLENCIA JWV582.pdf**
1197K

 **tp y cédula abogado (1) (1) (2) (1) (2).pdf**
378K